



BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

V LEGISLATURA

Serie III A:
PROPOSICIONES DE LEY
DEL SENADO

24 de noviembre de 1994

Núm. 1 (f)
(Cong. Diputados, Serie B, núm. 44
Núm. exp. 124/000001)

PROPOSICIÓN DE LEY

622/000001 Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales.

INFORME DE LA PONENCIA

622/000001

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del **Informe** emitido por la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Justicia para estudiar la proposición de Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales.

Palacio del Senado, 22 de noviembre de 1994.—
El Presidente del Senado, **Juan José Laborda Martín**.—El Secretario primero del Senado, **Manuel Ángel Aguilar Belda**.

La Ponencia designada para estudiar la Proposición de Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales, integrada por los Senadores D. Juan Antonio Arévalo Santiago (G.P. Socialista), D. Juan Ignacio Barrero Valverde (G.P. Popular), D. Joaquín Jesús Galán Pérez (G.P. Socia-

lista), D. Manuel Ibarz i Casadevall (G.P. Catalán de C. i U.) y D. Alfredo Prada Presa (G.P. Popular), tiene el honor de elevar a la Comisión de Justicia el siguiente

INFORME:

Por unanimidad, los ponentes aceptan las enmiendas 8 y 9, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Exposición de Motivos, pues introducen mejoras de estilo y contenido en la redacción de los textos a que se aplican.

También por unanimidad se acepta la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 1, pues los testigos y peritos son, en realidad, directamente afectados por las medidas de protección previstas en la Ley y no por todas sus disposiciones.

Se rechaza por unanimidad la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al artículo 1.2, pues parece innecesario el detalle que propone.

Se acepta por unanimidad la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 2, pues introduce correcciones gramaticales y de mejora en la redacción.

Respecto del artículo 3, se rechaza, por mayoría, la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular, pues su aceptación podría dar lugar a una utilización muy frecuente del mecanismo que establece, con las consiguientes cargas financieras elevadas.

Se acepta, por mayoría, la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Socialista, que extiende, en caso necesario, el período de duración de la protección.

Respecto del artículo 4, se aceptan por unanimidad:

a) La enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Socialista, que precisa que el órgano que revisará las medidas adoptadas es el competente para el enjuiciamiento.

b) La enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Socialista, que modifica la referencia al recurso, consecuencia de la enmienda anterior. c) La enmienda número 19, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que mejora la redacción del número 1 de este artículo.

d) La enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Socialista, que elimina una abreviatura en la palabra «artículo».

Se aceptan por unanimidad las enmiendas números 20 y 21, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que introducen mayor precisión técnico-jurídica en los números 3 y 5 de este artículo 4.

Se rechaza por mayoría la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Popular, al párrafo tercero del número 3º del artículo 4, por estimarse que la propuesta que plantea está contemplada en los textos de los párrafos segundo y tercero del número 3 de este artículo.

Se rechaza por unanimidad la enmienda número 1, de la Sra. Vilallonga Elviro y del Sr. Martínez Sevilla, pues se trata de una materia incluida en el proyecto de Ley del Código Penal, actualmente en tramitación parlamentaria.

Se rechaza, también por unanimidad, la enmienda número 2, de la Sra. Vilallonga Elviro y del Sr. Martínez Sevilla, pues se refiere a la indemnización de las víctimas de actos violentos, materia ésta que habrá de tratarse en un marco diferente al de la presente proposición de Ley.

Se aceptan por unanimidad:

a) Las enmiendas números 6, del Grupo Parlamentario Popular, y 16, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Disposición Derogatoria, pues mejoran técnicamente el texto de la misma.

b) Las enmiendas números 7, del Grupo Parlamentario Popular, y 17, del Grupo Parlamentario Socialista, a la Disposición Final, pues mejoran técnicamente el texto de la misma.

Se rechaza por unanimidad la enmienda número 3, de la Sra. Vilallonga Elviro y del Sr. Martínez Sevilla, a la Disposición Final Primera, pues la presente proposición de Ley carece de artículo 11.

Palacio del Senado, 22 de noviembre de 1994.—
Juan Antonio Arévalo Santiago, Juan Ignacio Barrero Valverde, Joaquín Jesús Galán Pérez, Manuel Ibarz i Casadevall y Alfredo Prada Presa

A N E X O

PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE PROTECCION A TESTIGOS Y PERITOS EN CAUSAS CRIMINALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

La experiencia diaria pone de manifiesto en algunos casos las reticencias de los ciudadanos a colaborar con la Policía Judicial y con la Administración de Justicia en determinadas causas penales ante el temor a sufrir represalias.

Ello conlleva, con frecuencia, que no se pueda contar con testimonios y pruebas muy valiosos en estos procesos.

Ante esta situación, el legislador debe proceder a dictar normas que resulten eficaces en la salvaguarda de quienes como testigos o peritos, deben cumplir con el deber constitucional de colaboración con la justicia.

De no hacerlo así, podrían encontrarse motivos que comportasen retraimientos e inhibiciones por parte de posibles testigos y peritos no deseables en un Estado de Derecho, con el añadido de verse perjudicada la recta aplicación del ordenamiento jurídico-penal y facilitada en su caso, la impunidad de los presuntos culpables.

Es obvio, sin embargo, que las garantías arbitradas en favor de los testigos y peritos no pueden gozar de un carácter absoluto e ilimitado, es decir, no pueden violar los principios del proceso penal. De ahí que la presente Ley tenga como norte hacer posible el nece-

sario equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las garantías y la tutela de derechos fundamentales inherentes a los testigos y peritos y a sus familiares.

El sistema implantado confiere al Juez o Tribunal la apreciación racional del grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas o alguna de las medidas legales de protección que considere necesarias, previa ponderación, a la luz del proceso, de los distintos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; medidas que, en el marco del derecho de defensa serán susceptibles de recurso en ambos efectos.

El propósito protector al que responde la Ley no es, por lo demás, exclusivo de nuestro país. De acuerdo con directrices señaladas por el Derecho comparado, se ha entendido ser imperiosa e indeclinable la promulgación de las normas precisas para hacer realidad aquel propósito de protección de testigos y peritos que, además, ha sido admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo principio general se hace también patente en la Resolución 827/1993, de 25 de mayo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, concerniente a la antigua Yugoslavia.

El contenido de la Ley es breve. Junto a su ámbito de aplicación, regulado en el artículo 1, y las medidas protectoras y garantías del justiciable recogidos en los artículos 2 y 3, contiene el artículo 4 y último una serie de medidas complementarias de protección, que habrán de aplicar, cada uno en su esfera, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y la Autoridad Judicial.

Artículo 1

1. Las medidas de protección previstas en esta Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos o peritos intervengan en procesos penales.

2. Para que sean de aplicación las disposiciones de la presente Ley será necesario que la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos.

Artículo 2

Apreciada la circunstancia prevista en el artículo anterior, el Juez instructor acordará motivadamente, de oficio o a instancia de parte, cuando lo estime necesario en atención al grado de riesgo o peligro, las

medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asiste a la defensa del procesado, pudiendo adoptar las siguientes decisiones:

a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave.

b) Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal.

c) Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario.

Artículo 3

1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la Autoridad Judicial, cuidarán de evitar que a los testigos o peritos se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniera esta prohibición. Dicho material será devuelto a su titular una vez comprobado que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o peritos de forma tal que pudieran ser identificados.

2. A instancia del Ministerio Fiscal y para todo el proceso, o si, una vez finalizado éste, se mantuviera la circunstancia de peligro grave prevista en el artículo 1.2 de esta Ley, se brindará a los testigos y peritos, en su caso, protección policial. En casos excepcionales podrán facilitárseles documentos de una nueva identidad y medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo. Los testigos y peritos podrán solicitar ser conducidos a las dependencias judiciales, al lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio en vehículos oficiales y durante el tiempo que permanezcan en dichas dependencias se les facilitará un local reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado.

Artículo 4

1. Recibidas las actuaciones, el órgano judicial competente para el enjuiciamiento de los hechos se

pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección de los testigos y peritos adoptadas por el Juez de Instrucción, así como si procede la adopción de otras nuevas, previa ponderación de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, de los derechos fundamentales en conflicto y de las circunstancias concurrentes en los testigos y peritos en relación con el proceso penal de que se trate.

2. Las medidas adoptadas podrán ser objeto de recurso de reforma o súplica.

3. Sin perjuicio de lo anterior, si cualquiera de las partes solicitase motivadamente en su escrito de calificación provisional, acusación o defensa, el conocimiento de la identidad de los testigos o peritos propuestos, cuya declaración o informe sea estimado pertinente, el Juez o Tribunal que haya de entender la causa, en el mismo auto en el que declare la pertinencia de la prueba propuesta, deberá facilitar el nombre y los apellidos de los testigos y peritos, respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en esta Ley.

En tal caso, el plazo para la recusación de peritos a que se refiere el artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se computará a partir del momento en que se notifique a las partes la identidad de los mismos.

En los cinco días siguientes a la notificación a las partes de la identidad de los testigos, cualquiera de ellos podrá proponer nueva prueba tendente a acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de su testimonio.

4. De igual forma, las partes podrán hacer uso del derecho previsto en el apartado anterior, a la vista de las pruebas solicitadas por las otras partes y admitidas por el órgano judicial, en el plazo previsto para la interposición de recurso de reforma y apelación.

5. Las declaraciones o informes de los testigos y peritos que hayan sido objeto de protección en apli-

cación de esta Ley durante la fase de instrucción, solamente podrán tener valor de prueba, a efectos de sentencia, si son ratificados en el acto del juicio oral en la forma prescrita en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por quien los prestó. Si se consideraran de imposible reproducción a efectos del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habrán de ser ratificados mediante lectura literal a fin de que puedan ser sometidos a contradicción por las partes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

El artículo 3.2 de esta Ley tendrá el carácter de ley ordinaria.

Segunda

El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la publicación de la presente Ley, dictará las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su ejecución.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICION FINAL

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.